

El sistema universitario atraviesa una crisis profunda como resultado de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Los trabajadores y las trabajadoras docentes de las Universidades Nacionales hemos visto reducido nuestro salario a la mitad desde el comienzo de esta gestión, cada mes más compañeros y compañeras caen en la pobreza e incluso en la indigencia.

En junio de este año, el personal docente universitario ya había perdido casi un 52% de su poder adquisitivo y, para julio, el aumento recibido fue de apenas un 11%. Esta es la mayor caída salarial en los últimos 40 años, superando incluso la hiperinflación de 1989 y comparable a la crisis de 2002.

El pasado 23 de abril se llevó a cabo una de las manifestaciones más significativas desde el retorno de la democracia. Cientos de miles de personas de todo el país se movilizaron para defender el derecho a una educación superior pública, gratuita y de calidad, frente al ataque sistemático del gobierno de Javier Milei. Hoy en día, ese presupuesto apenas cubre una cuarta parte de las necesidades operativas de las universidades.

Han pasado cuatro meses desde esa multitudinaria marcha, y aún no hemos recibido una respuesta adecuada a nuestras demandas salariales. El gobierno solo ha actualizado las partidas destinadas al mantenimiento de la infraestructura, mientras que el problema central sigue sin resolverse: el atraso salarial del personal de las universidades nacionales, que representa el 90% del presupuesto universitario.

Desde marzo, la negociación salarial universitaria ha estado estancada debido a un gobierno que ignora sistemáticamente las demandas de sus trabajadores/as y decreta aumentos unilaterales insuficientes para el sector.

En este contexto, el último "aumento" propuesto por el ejecutivo nacional, rechazado por todas las representaciones gremiales, fue del 3% para agosto y del 2% para septiembre. Esto es una prueba más del desconocimiento del gobierno sobre la paritaria como herramienta de negociación sindical.

La emergencia salarial es ya una realidad y esta lucha no es solo de trabajadoras y trabajadores universitarios, sino de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general, a quienes invitamos a unirse para proteger el futuro de nuestra universidad y de nuestro país.

¡Sin salarios dignos, no puede haber una Universidad Pública de calidad!